



Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/46/529
11 de octubre de 1991

ORIGINAL: ESPAÑOL

Cuadragésimo sexto período de sesiones
Tema 48 del programa

INFORME DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

Situación de los derechos humanos en El Salvador

Nota del Secretario General

El Secretario General tiene el honor de transmitir a los miembros de la Asamblea General el informe sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, preparado por el Profesor José Antonio Pastor Ridruejo, Representante Especial de la Comisión de Derechos Humanos, de conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1991/75 de dicha Comisión, de 6 de marzo de 1991, y la decisión 1991/257 del Consejo Económico y Social, de 31 de mayo de 1991.

Anexo

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SALVADOR
PREPARADO POR EL REPRESENTANTE ESPECIAL DE LA COMISION DE DERECHOS
HUMANOS, DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO 13 DE LA RESOLUCION 1991/75
DE DICHA COMISION, DE 6 DE MARZO DE 1991, Y LA DECISION 1991/257
DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL, DE 31 DE MAYO DE 1991

INDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
I. INTRODUCCION	1 - 3	3
II. SITUACION POLITICA GENERAL	4 - 26	3
III. DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES	27 - 33	10
IV. DERECHOS CIVILES Y POLITICOS	34 - 79	11
A. Ejecuciones sumarias	34 - 58	11
B. Capturas, secuestros y desapariciones	59 - 66	18
C. Trato a los presos políticos	67 - 71	21
D. La justicia penal	72 - 79	22
V. EL RESPETO AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL CONFLICTO ARMADO	80 - 100	24
VI. LOS ESFUERZOS PARA MEJORAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS RESULTADOS	101 - 105	30
VII. CONCLUSIONES	106 - 121	31
VIII. RECOMENDACIONES	122 - 126	34

I. INTRODUCCION

1. Se redacta el presente informe en cumplimiento de la resolución 1991/75 de la Comisión de Derechos Humanos, y la decisión 1991/257 del Consejo Económico y Social. El documento versa sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador durante los meses transcurridos de 1991 aunque, obviamente, debe ser leído a la luz de los informes presentados por el Representante Especial desde 1981. El Representante Especial expresa su agradecimiento al Gobierno de El Salvador y a otros Gobiernos, al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a organizaciones internacionales y no gubernamentales y a otras personas e instituciones por la cooperación prestada para el cumplimiento de su mandato.

2. Por carta de 17 de junio de 1991 el Representante Especial expresó al Gobierno de El Salvador su deseo de hacer una nueva visita al país entre los días 21 y 29 de septiembre. Por carta de 4 de julio de 1991 el Gobierno autorizó que la visita se realizase durante dichas fechas.

3. Durante su estancia en El Salvador el Representante Especial tuvo ocasión de entrevistarse con el Presidente Constitucional de El Salvador, licenciado Alfredo Cristiani, y con altas autoridades y funcionarios de otros poderes de la República así como con jefes y oficiales de la fuerza armada y cuerpos de seguridad; examinó en los locales de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado a numerosos testigos que le presentaron esa y otras organizaciones humanitarias no gubernamentales y recibió amplia información oral y escrita de dichas organizaciones y de movimientos campesinos y sindicales; mantuvo reuniones con personas independientes; y visitó por fin las Penitenciarías de Ilopango y "La Esperanza" (Mariona) donde tuvo ocasión de conversar en condiciones de confidencialidad con presos políticos de distinta ideología. El Representante Especial ha celebrado también fuera del país entrevistas con representante del FMLN.

II. SITUACION POLITICA GENERAL

4. En los meses transcurridos de 1991 ha persistido el conflicto bélico entre la Fuerza Armada y el FMLN, aunque no con la intensidad de años anteriores. Asimismo, ha continuado el proceso de negociación entre el Gobierno de la República de El Salvador y el FMLN, bajo los auspicios del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas. Cabe recordar que la intervención del Secretario General se produjo a solicitud de los Presidentes centroamericanos y en el marco del mandato de buenos oficios que le confiriese el Consejo de Seguridad a través de la resolución 637 (1989). El Secretario General acordó llevar a cabo dicha tarea a petición expresa del Presidente de la República, licenciado Alfredo Cristiani, y de los cinco comandantes del FMLN, y ante la formulación de seguridades por las partes de acudir a la negociación con un propósito serio de lograr la paz, y de buena fé.

5. De conformidad con el acuerdo suscrito en Ginebra el 4 de abril de 1990, el proceso de negociación en curso tiene cuatro objetivos: terminar el conflicto armado por medio de acuerdos políticos en el más corto tiempo

posible; promover la democratización del país; garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña 1/. El Acuerdo de Ginebra abrió también la posibilidad de participación en el proceso de los partidos políticos y otras organizaciones sociales representativas.

6. El calendario del proceso de negociación fue aprobado en Caracas el 21 de mayo de 1990. De conformidad con dicho calendario el proceso se compondría de dos etapas: la primera estaría orientada al logro de una serie de acuerdos políticos conducentes a un cese el fuego, incluyendo los temas de la fuerza armada, derechos humanos, sistemas judicial y electoral, reformas constitucionales, problemas económicos y sociales, y verificación de los acuerdos alcanzados por parte de la Organización de las Naciones Unidas. La segunda etapa estará dedicada al establecimiento de las condiciones y garantías necesarias para la reinserción de los miembros del FMLN en la vida institucional, civil y política del país.

7. La primera reunión entre las partes correspondiente al año 1991, y sexta de la ronda de negociaciones bajo los auspicios del Secretario General, tuvo lugar en Ciudad de México del 3 al 6 de enero. Pese al carácter secreto de la misma, trascendió que se habría tratado el tema relativo a la Fuerza Armada 2/. Fue la primera reunión celebrada después del inicio de la ofensiva militar del FMLN lanzada el 20 de noviembre de 1990.

8. El 4 de enero de 1991, el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, James A. Baker III, y el entonces Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Eduard A. Shevardnadze, dirigieron una carta conjunta al Secretario General de la Organización reiterándole su firme apoyo a sus esfuerzos personales en la negociación de una solución política que ponga fin al conflicto en El Salvador, de conformidad con los Acuerdos de Ginebra y de Caracas. Expresaron asimismo su profunda preocupación por el aumento de la violencia en el país y consideraron que era extremadamente importante lograr un acuerdo de cese el fuego supervisado por las Naciones Unidas, con anterioridad a la celebración de las elecciones legislativas y municipales del 10 de marzo de 1991. Respecto a éstas, expresaron su esperanza que serían respetados los legítimos intereses de todos los sectores políticos, que se crearían las condiciones para la libre participación de dichos sectores, y para la observación del proceso electoral por parte de las Naciones Unidas. En su calidad de miembros del Consejo de Seguridad, afirmaron que estaban dispuestos a trabajar conjuntamente con otros miembros del Consejo y con otros Estados interesados, para lograr que cualquier acuerdo político que se alcance antes de un cese el fuego fuese plenamente respetado y llevado a cabo. Por último, consideraron que la participación personal del Secretario General en estos esfuerzos era clave para el logro de una solución 3/.

9. Del 19 al 21 de febrero de 1991 tuvo lugar la séptima ronda de negociaciones y la segunda reunión del presente año, en San José de Costa Rica. Posteriormente, el 4 de abril de 1991, el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas emitió una declaración, al cumplirse un año del inicio del proceso de negociación bajo sus auspicios. El Secretario General hizo referencia al Acuerdo de Derechos Humanos celebrado entre las

partes el 26 de julio de 1990 en San José de Costa Rica, y anunció que sometería una propuesta formal al Consejo de Seguridad respecto al establecimiento en el país de la misión de verificación del Acuerdo, como componente inicial de una operación que se denominará ONUSAL, la misma que asumirá la verificación de los diversos acuerdos que resultasen de la negociación. Respecto al tema de la Fuerza Armada, señaló que aunque no se había alcanzado ningún acuerdo, se habían realizado progresos. Reveló asimismo que el proceso de negociación había motivado un amplio debate respecto a las distintas materias consideradas en el mismo entre todos los partidos políticos, muchas organizaciones sociales y otras instituciones salvadoreñas. Previno sin embargo sobre la posibilidad de que el proceso generase demasiadas expectativas sobre el logro de la paz a corto plazo, dada la profundidad y complejidad de las materias consideradas.

10. Una nueva ronda de negociaciones tuvo lugar en la Ciudad de México del 4 al 27 de abril de 1991. La reunión permitió alcanzar importantes y esperanzadores acuerdos, según el Representante Personal del Secretario General en el proceso de negociación 4/. Los acuerdos se refieren a la reforma de los artículos 77, 131, 162, 263, 168, 172, 174, 180, 182, 186, 188, 191, 192, 193, 208, 209, 211, 212, 213, 216 y 217 de la Constitución Política; a la derogación del artículo 30; a la adición de un nuevo artículo a continuación del artículo 193; y a la reforma del enunciado del Capítulo VII del Título VI de dicha Constitución. Estos artículos se refieren a la Fuerza Armada; sistemas judicial y electoral y derechos humanos. Entre las disposiciones más importantes se encuentran la creación de una Policía Nacional Civil para el resguardo de la paz, la tranquilidad y la seguridad pública, con estricto apego al respeto a los derechos humanos y bajo la dirección de autoridades civiles, independiente de la Fuerza Armada y adscrita a un Ministerio diferente al que está adscrita ésta; la creación del cargo de Procurador Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, integrante del Ministerio Público y elegido por la Asamblea Legislativa por mayoría calificada de los dos tercios de los diputados electos; el establecimiento de una asignación al Órgano Judicial no inferior al 6% de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado; la creación de un Tribunal Supremo Electoral; y el establecimiento de la jurisdicción militar como régimen excepcional respecto de la unidad de la justicia y limitada al conocimiento de delitos y faltas de servicio puramente militares 5/.

11. En la ronda de negociaciones de México se acordó también el establecimiento de una Comisión de Verdad encargada de investigar aquellos graves actos de violencia ocurridos a partir de 1980, cuyo impacto en la sociedad demanda el público conocimiento de las condiciones y características de su realización. La Comisión estará integrada por tres miembros nombrados por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas luego de escuchar el parecer de las partes, y deberá emitir un informe final incluyendo conclusiones y recomendaciones, dentro de un período de seis meses posterior a su establecimiento.

12. El 27 de abril de 1991 el FMLN emitió una declaración unilateral, en la cual señala que la disposición del artículo 211 a reformarse describiendo a la Fuerza Armada como una institución "permanente" no es compatible con su posición sobre el particular. Asimismo, declara que existen aún reformas constitucionales sujetas a negociación, particularmente las relativas a la desmilitarización, al artículo 105 relativo a los límites de la propiedad de las tierras rurales, y al procedimiento mismo de reforma de la Constitución, sea a través de la modificación del artículo 248 de la misma o a través de otros procedimientos como la consulta popular.

13. El 28 de abril de 1991 el Presidente de la República sometió los acuerdos de reforma constitucional alcanzados en México a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa aprobó el documento presentado por el Presidente. No obstante, para que las reformas puedan entrar en vigor, deben ser ratificadas por dos terceras partes de los diputados de la legislatura que se inició el 1° de mayo, y deben ser publicadas en el diario oficial. Debe sin embargo señalarse que la Asamblea Legislativa introdujo modificaciones sobre lo acordado en México respecto a la Corte Suprema de Justicia y a la composición del Tribunal Supremo Electoral 6/.

14. Una nueva ronda de negociaciones se inició el 25 de mayo de 1991 en Caracas, Venezuela. La ronda concluyó el 2 de junio de 1991. Tanto el Coronel Mauricio Ernesto Vargas, Jefe Adjunto del Estado Mayor de la Fuerza Armada, como el comandante del FMLN Shafik Handal, declararon que no se produjeron mayores avances 7/.

15. Representantes del Gobierno y del FMLN se reunieron por décima vez en Querétaro, México, del 16 al 23 de junio de 1991. Previamente, representantes del FMLN y de la denominada Comisión Interpartidaria, que agrupa a los partidos políticos presentes en la Asamblea Legislativa, celebraron una reunión en Ciudad de México, con el objeto de conocer la posición del FMLN respecto al proceso de negociación 8/. Este diálogo representa una mayor participación de los principales actores políticos salvadoreños en el proceso de negociación. La ronda de negociaciones de Querétaro habría culminado también, sin acuerdos concretos. El Representante Personal del Secretario General, aclaró sin embargo que las negociaciones se encontraban en una fase decisiva en la que son difíciles los acuerdos parciales 9/. La ronda habría estado dedicada a los temas de reforma de la Fuerza Armada, desarme y desmovilización de las fuerzas del FMLN, y cese de las acciones militares 10/.

16. Las conversaciones prosiguieron el 10 y 11 de julio de 1991 en México. El Representante Personal del Secretario General, declaró al concluir las mismas que "hubo sustanciales avances, aunque nada espectacular" 11/.

17. Cabe señalar que la décima cumbre de presidentes centroamericanos, que tuvo lugar en San Salvador del 15 al 17 de julio de 1991, concluyó con una declaración de los Jefes de Estado de la región mediante la cual "reiteran su condena de los actos de violencia y terrorismo, considerando que no tienen justificación" y "demandan, para el bien de Centroamérica y bajo la verificación de la Organización de las Naciones Unidas, el desarme y la desmovilización del FMLN y su incorporación a la vida civil, institucional y política de El Salvador" 12/.

18. Con el objeto de desbloquear el proceso de negociación, el Secretario General de la Organización invitó al Presidente de la República y a los comandantes del FMLN, a reunirse con él en la sede de la Organización en Nueva York, los días 16 y 17 de septiembre 13/. Las reuniones de ambas partes con el Secretario General continuaron hasta el 25 de septiembre, fecha en la cual se logró suscribir el denominado Acuerdo de Nueva York. Dicho Acuerdo se inspira en la necesidad de dar un impulso final al proceso de negociación, con el objeto de que pueda alcanzarse a corto plazo el conjunto de acuerdos políticos requerido para terminar definitivamente el conflicto armado. El Acuerdo de Nueva York crea la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ); establece un proceso de depuración y reducción de la Fuerza Armada y el compromiso entre las partes para redefinir su doctrina; reitera la vigencia del acuerdo alcanzado en México el 27 de abril de 1991 sobre el sistema educativo de la Fuerza Armada; establece la agenda para la negociación relativa a la nueva Policía Nacional Civil; precisa algunos acuerdos alcanzados en el tema económico y social; y establece una agenda para la negociación de los temas pendientes.

19. Cabe destacar que el cumplimiento de todos los acuerdos políticos alcanzados por las partes queda sometido a la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ), la cual constituirá un mecanismo de control y participación de la sociedad civil en el proceso de cambios resultante de las negociaciones. COPAZ estará integrada por dos representantes del Gobierno, uno de los cuales será un miembro de la Fuerza Armada; dos representantes del FMLN; y uno por cada partido o coalición con representación en la Asamblea Legislativa. El Arzobispo de San Salvador y un delegado de ONUSAL tendrán acceso a sus trabajos y deliberaciones en calidad de observadores. En caso de discrepancia sobre si una materia debe ser sometida a COPAZ, ésta dirimirá. COPAZ tendrá acceso y podrá inspeccionar toda actividad o lugar vinculados con la ejecución de los acuerdos de paz; estará facultada para elaborar anteproyectos legislativos necesarios para el desarrollo de los acuerdos; podrá emitir toda clase de conclusiones y recomendaciones relativas a la ejecución de los acuerdos de paz y hacerlas públicas; estará facultada para dirigirse a los órganos pertinentes de las Naciones Unidas a través del Secretario General; y estará facultada para supervisar la puesta en práctica de los acuerdos alcanzados por las partes. Se establece asimismo que su creación será respaldada expresamente en la resolución que adopte el Consejo de Seguridad sobre los acuerdos de paz; que el Secretario General mantendrá informado al Consejo de Seguridad sobre su actividad y su efectividad; y que será respaldada por gobiernos que se encuentren en posición de apoyar efectivamente la garantía requerida por los acuerdos.

20. En la ronda de negociaciones de Nueva York se acordó asimismo un proceso de depuración de la Fuerza Armada, en base a la evaluación de todos sus miembros por una comisión ad hoc. La Fuerza Armada participará en dicha comisión con dos representantes, los cuales sólo tendrán acceso a las deliberaciones de la misma. Se acordó, por otro lado, que las partes establecerán los criterios en base a los cuales se determinará el tamaño a que quedará reducida la Fuerza Armada en tiempo de paz, y se elaborará el plan de reducción de la misma (forma, calendario, presupuesto, etc.). De otro lado, se estipula que se llegará a un acuerdo para la redefinición de la doctrina de

la Fuerza Armada, en el entendido que tiene por misión la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio, partiendo del principio según el cual su actuación y régimen se enmarcan en el estado de derecho, la primacía de la dignidad de la persona humana y el respeto a sus derechos; la defensa y el respeto a la soberanía del pueblo; su carácter de institución al servicio de la nación ajena a toda consideración política, ideológica, de posición social o a cualquier otra discriminación; y su subordinación a las autoridades constitucionales. La formación profesional de sus miembros pondrá énfasis en la preeminencia de la dignidad humana y de los valores democráticos, en el respeto a los derechos humanos y en el sometimiento a las autoridades constitucionales. Se estipula que los acuerdos a que se llegue en esta materia comprenderán los sistemas de admisión y docencia.

21. Respecto a la Policía Nacional Civil, se establece que el proceso de creación y organización de la misma debe comenzar de inmediato, sin esperar a otros acuerdos políticos ni al cese del enfrentamiento armado. La agenda para la negociación de este tema debe incluir su régimen jurídico; doctrina; incorporación de nuevo personal, en base a un sistema de selección y formación pluralista y no discriminatorio; perfiles y entrenamiento; la evaluación del personal de la actual Policía Nacional, y la disolución de la Guardia Nacional y de la Policía de Hacienda como cuerpos de seguridad pública. La organización de la Policía Nacional Civil y de la Academia Nacional de Seguridad Pública y la selección de su personal, serán objeto de estrecha cooperación y supervisión internacionales.

22. En relación al tema económico y social se estableció que las tierras que exceden del límite constitucional de 245 hectáreas, así como aquellas que son propiedad del Estado y que no son actualmente reservas forestales, serán destinadas a satisfacer la necesidad de tierras de campesinos y pequeños agricultores que carezcan de ellas. Para este fin, se estipula que el Gobierno debe procurar adquirir las tierras ofrecidas en venta al Estado. Queda estipulado, asimismo, que se respetará el estado actual de tenencia de tierras en las zonas conflictivas, mientras se da una solución legal satisfactoria definitiva; y que se revisarán las políticas de otorgamiento de créditos al sector agropecuario. De otro lado, las partes acordaron remitir a la denominada etapa de "negociación comprimida", la consideración de las medidas necesarias para aliviar el costo social de los programas de ajuste estructural; de las formas convenientes para la cooperación externa directa en proyectos de asistencia y desarrollo de las comunidades; y para la creación de un foro para la concertación económica y social, con la participación de los sectores gubernamental, liberal y empresarial.

23. Según fue informado el Representante Especial por ambas partes, éstas tienen la intención de dar comienzo a la etapa de la negociación comprimida el 12 de octubre de 1991, siendo el objetivo óptimo concluirla antes del 15 de diciembre del año en curso.

24. El Representante Especial reiterar una vez más su convicción de que la ansiada erradicación de las violaciones de los derechos humanos en El Salvador pasa ineludiblemente por el éxito de las negociaciones en curso. La larga y dolorosa experiencia del país demuestra que mientras haya violencia bélica persistirán las violaciones. Así las cosas, y aún reconociendo la profundidad de las dificultades existentes, el Representante Especial no puede menos que instar nuevamente a las partes con el mayor énfasis para que en el proceso de negociación sigan dando muestras de visión del futuro, realismo e imaginación, y sobre todo de generosidad con el pueblo salvadoreño, a fin de que se llegue lo antes posible a una paz justa y duradera. Piensa además el Representante Especial en este orden de ideas que la reducción de la violencia dentro y fuera de los combates por una y otra parte contribuirá a crear condiciones de confianza que hagan más viable el pronto y feliz resultado de las negociaciones.

25. En conversaciones mantenidas durante su visita al país con sectores sociales de diversas ideologías, el Representante Especial creyó percibir en algunos de ellos la existencia de una disposición psicológica de confrontación poco o nada acorde con los propósitos de paz y concordia que animan las negociaciones en curso entre el Gobierno y el FMLN. El Representante Especial considera en este orden de ideas que los sentimientos de reconciliación y paz compartidos por la inmensa mayoría del pueblo salvadoreño no han llegado a penetrar aún en la cultura cívica de algunos grupos minoritarios y radicalizados de ideología contrapuesta, hecho que puede obstaculizar el cabal cumplimiento de los acuerdos alcanzados y por alcanzar. De ahí la necesidad, a juicio del Representante Especial, de que el Gobierno y el FMLN se esfuercen al máximo por imbuir a todas las fuerzas y sectores sociales del país, incluyendo a los más radicalizados, los nobles propósitos que inspiran las negociaciones; de ahí también la importancia de dotar a los acuerdos conseguidos y por conseguir de garantías institucionales y de todo orden que aseguren su eficaz y escurpulooso cumplimiento.

26. El Representante Especial considera necesarios señalar que el 10 de marzo de 1991 se celebraron elecciones generales legislativas y municipales en el país. De acuerdo a informaciones del Consejo Central de Elecciones, en dicho proceso electoral participó el 53% de los votantes inscritos. Como consecuencia de dicho proceso, la Asamblea Legislativa, que consta de 84 representantes, quedó formada de la siguiente forma: al partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) le correspondieron 39 diputados; el partido Demócrata Cristiano (PDC), 26 diputados; al partido Conciliación Nacional (PCN), 9 diputados; al partido Convergencia Democrática (CD), 8 diputados; al partido Unión Democrática Nacionalista (UDN), un diputado; y al partido Movimiento Auténtico Cristiano (MAC), un diputado. Participó también en el proceso electoral el partido Acción Democrática (AD), no alcanzando los votos necesarios para acreditar a un representante.

III. DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

27. El Representante Especial ha continuado recibiendo múltiple información de diversas fuentes sobre hostigamientos de la Fuerza Armada y cuerpos de seguridad a las actividades de los movimientos sindicalistas, campesinos y de cooperativas y habitantes de comunidades repobladas. Tales hostigamientos habrían llegado en ocasiones a capturas, amenazas graves, malos tratos y torturas e incluso a desapariciones y ejecuciones sumarias, hechos que se mencionarán en el lugar correspondiente de este informe. En los párrafos que siguen se recoge información, selectiva y no exhaustiva, sobre los hostigamientos en cuestión.

28. Así, los cuerpos de seguridad habrían atacado el 27 de febrero de 1991 una manifestación de 6.000 sindicalistas que se desarrollaba frente al Palacio Presidencial en San Salvador. Se informa también que entre el 12 y el 18 de marzo de 1991, los cuerpos de seguridad realizaron acciones contra huelguistas de los servicios públicos, hiriendo a dos de ellos con armas de fuego y capturando a 15 14/. De otro lado, el día 20 de marzo de 1991, elementos de la Fuerza Armada habrían abierto fuego en el barrio de Mejicanos, aledaño a la capital, contra diez componentes del "Comité de Desempleados y Despedidos de El Salvador" cuando pintaban eslóganes que pedían la desmilitarización del país. Dos de dichas personas habrían resultado heridas y cinco detenidas 15/. En carta que dirigió al Representante Especial el Comité Cristiano pro desplazados de El Salvador (CRIPDES) 16/, se hace mención de la campaña de acoso gubernamental tendente al desalojo de las comunidades y asentamientos de desplazados, repobladores y repatriados; campaña que habría supuesto muertes, heridos graves y capturas de personas así como destrucción de propiedades. Muchas otras fuentes han suministrado información sobre estos hechos. Religiosos de Chalatenango explicaron personalmente al Representante Especial los detalles de estos acosos: amenazas graves, malos tratos, capturas y destrucción de víveres, enseres y cosechas. Se refirieron también los mencionados religiosos al hecho de que los habitantes de las zonas repobladas no han sido aún provistos de documentación, lo que les provoca inseguridad y les impide el libre tránsito por el territorio salvadoreño.

29. Trasladadas estas quejas a las autoridades salvadoreñas, el Representante Especial recibió una vez más la explicación de que la gran mayoría de las organizaciones sindicales y campesinas salvadoreñas escán infiltradas por el FMLN y sirven los objetivos políticos de este frente con finalidades de provocación y desestabilización, hecho que niegan las organizaciones en cuestión. Sea lo que fuere, el Representante Especial considera que las acciones gubernamentales deben acomodarse a las disposiciones constitucionales y legales y respetar escrupulosamente los derechos humanos.

30. Recibió amplia información en San Salvador el Representante Especial sobre el hecho de que algunas organizaciones populares están alentando con propósitos desestabilizadores la ocupación violenta de tierras ajenas. Miembros de tales organizaciones reconocieron al Representante Especial la realidad de este hecho, alegando que semejantes ocupaciones constituían un "derecho natural" de los más desposeídos, y quejándose acremente de los posteriores desalojos. Responsables de la "Financiera Nacional de Tierras Agrícolas" (FINATA) manifestaron al respecto que tenían tierras a disposición

de aquellos campesinos que las solicitasen ateniéndose a los requisitos legales; por su parte, el presidente del recién creado "Banco de Tierras" declaró que su entidad sólo puede financiar la adquisición de propiedades si hay acuerdo entre las partes interesadas, pero nunca la adquisición de tierras invadidas.

31. Aunque no con la gravedad e intensidad de años anteriores a 1990, el Representante Especial ha recibido información sobre ataques del FMLN contra la infraestructura económica del país. Así, en un documento entregado por la "Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica de Río Lempa" (CEL), de 25 de septiembre de 1991, se da cuenta de que durante el período comprendido entre septiembre de 1990 y agosto de 1991, se han producido 732 atentados a las líneas de transmisión, además de 7 ataques a centrales y subestaciones generadoras de energía. Más concretamente, una acción de sabotaje del FMLN dejó durante una hora, el 17 de abril de 1991, a la parte central del país sin energía eléctrica 17/.

32. De otro lado, según un comunicado que habría emitido el FMLN el día 13 de agosto de 1991 18/, se estaría lanzando una "campana de castigo" contra empresas constructoras y financieras. La campana se habría traducido posteriormente en la destrucción de viviendas de lujo en la zona de Zacamil.

33. En este orden de consideraciones, el Representante Especial pudo leer en San Salvador una carta con membrete del FMLN dirigida en septiembre de 1991 al gerente de una industria sintética en la que en lenguaje formalmente educado se "sugiere" un "aporte único como fondo de guerra de 500.000 dólares" bajo amenazas de captura. Mostrada la misiva por el Representante Especial a un representante del FMLN, éste expresó su extrañeza por el membrete - que a su decir no corresponde al actualmente utilizado por el Frente - y quedó en dar información adicional.

IV. DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

A. Ejecuciones sumarias

34: Durante los meses transcurridos de 1991, el Representante Especial ha recibido de múltiples fuentes amplia información sobre ejecuciones sumarias políticamente motivadas, equivalentes a asesinatos, de personas no combatientes, y del mismo modo que en informes anteriores, quiere dejar constancia de la dificultad de determinar con precisión la cifra exacta de tales crímenes. Ello es así por las dificultades de la investigación y por el hecho de que las cifras totales difieren según las fuentes, circunstancias éstas que aconsejan suma prudencia y circunspección en la apreciación general de esta clase de hechos.

35. Se transcriben a continuación, y en tablas comparativas con las del año anterior, las cifras de ejecuciones sumarias comunicadas por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado y la Comisión de Derechos Humanos (Gubernamental) 19/ y que se imputan a miembros del Ejército, Fuerzas de Seguridad y Defensa Civil:

Ejecuciones sumarias políticamente, motivadas en personas no combatientes, que se imputan a miembros del ejército, fuerzas de seguridad y defensa civil		Muertes de población civil atribuidas a miembros de la fuerza armada	
<u>Fuente: Tutela Legal</u>		<u>Fuente: Comisión de Derechos Humanos (gubernamental)</u>	
	<u>1990</u>		<u>1991</u>
Enero	1	2	6
Febrero	7	4	2
Marzo	6	3	7
Abril	4	4	2
Mayo	7	6	4
Junio	9	16	7
Julio	8	4	10
Agosto	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>4</u>
Total (hasta agosto)	45	41	42

36. Con independencia de las cifras que se acaban de transcribir, el Representante Especial ha recibido también noticias específicas sobre ejecuciones sumarias; información comprendida indudablemente en las cifras consignadas en el párrafo anterior. Se recoge a continuación la mencionada información específica, en el entendido de que la misma tiene carácter selectivo y no exhaustivo.

37. En la presentación oral de su anterior informe a la Comisión de Derechos Humanos, el Representante Especial se había referido a la matanza masiva perpetrada durante la noche del 21 al 22 de enero de 1991 en la localidad de El Zapote, hechos en que perecieron 15 personas de la familia Aragón, con edades comprendidas entre los 14 y los 60 años. En aquella ocasión, el Representante Especial no pudo mencionar indicio alguno sobre quiénes pudieran ser los autores, ni aseverar que se tratase de un crimen políticamente motivado. Es importante señalar ahora que en un documento publicado en marzo de 1991 20/, Américas Watch dice lo siguiente:

"Although a question remains as to whether those currently implicated and detained were solely responsible for the Zapata killings and not aided by others, a preliminary investigation by Americas Watch finds it plausible that the massacre may have been the result of a family feud carried out without greater political motives. Major questions remain, however, as to exactly how a family feud resulted in a well-executed operation in which so many were killed. Moreover, the investigation by the government, which never seriously considered the possibility of military involvement, and on occasion actually sought to dismiss it, needs to continue in order to clarify the possibility of further perpetrators."

38. Según testimonio escuchado personalmente por el Representante Especial en San Salvador, el día 10 de febrero de 1991, Salvador Molina López, de 17 años, miembros de la coalición política Convergencia Democrática, había sido citado por Efraín Mazariego Torres, administrador de las canteras "Hornos de Cal" del caserío Chimalapa, cantón El Panal, jurisdicción de Metapán, Departamento de Santa Ana, a trabajar en el turno de noche. Sus familiares se opusieron a que concurriera, pues tanto Mazariega Torres como Carlos Torres, miembros de la escolta militar de la Defensas Civil del caserío Chimalapa, habrían amenazado de muerte con anterioridad a los militantes de Convergencia Democrática. Molina López concurreó y fue asesinado por Efraín Mazariega Torres, quien arrojó el cadáver a una quebrada denominada "Casas Viejas". Mazariega Torres fue detenido y confesó el asesinato ante el Juzgado Primero de Paz de Metapán. Sin embargo, fue posteriormente dejado en libertad. Recientemente, tanto él como Carlos Torres habrían amenazado al padre de la víctima con matar a su otro hijo, Víctor Manuel Molina López, y con destruir su casa con granadas, si proseguía con las acciones judiciales y con las denuncias sobre el caso.

39. El día 21 de febrero de 1991, un miembro de la Defensa Civil habría disparado sobre el joven Félix Alberto Arévalo, de 19 años, al que causó heridas graves, en el curso de una operación de reclutamiento forzado, en la localidad de Cuscatancingo 21/.

40. Según la Comisión de Derechos Humanos (no gubernamental) de El Salvador 22/, el día 19 de marzo de 1991, efectivos de la Fuerza Armada dispararon contra un grupo de personas civiles que caminaban por la carretera de Chalatenango a Guarjila; a consecuencia de tales disparos sufrió heridas graves la niña de 8 años María Teresa, que murió dos días después.

41. De acuerdo a la declaración de un testigo, el día 10 de mayo de 1991, Víctor Méndez Cruz, de 24 años de edad, estudiante de arquitectura, paseaba en bicicleta en compañía de su novia Angélica María Castillo Paiz, de 20 años, estudiante de enfermería, por la Avenida Central, colonia Santa Emilia, San Miguel. Repentinamente, un microbús marca Toyota tipo Hiace, color rojo, con vidrios polarizados, les interceptó, descendiendo del vehículo un hombre vestido con uniforme militar verde olivo camuflado, con gorra y botas militares, quien intentó obligar a subir al vehículo a Angélica María Castillo Paiz. Dentro del vehículo habrían otras mujeres, al parecer recientemente detenidas. Méndez Cruz intentó impedir el secuestro de su novia, ante lo cual el supuesto militar disparó varias veces contra él con un fusil G-3, ocasionándole la muerte. A continuación disparó contra la joven, hiriéndola gravemente. La joven murió al día siguiente en un hospital de San Miguel. El lugar donde se cometió el doble asesinato está ubicado dentro del perímetro de seguridad del cuartel del Batallón Arce. Durante el velatorio de Méndez Cruz, detectives de la Policía Nacional de San Miguel registraron el cadáver, encontrando en la billetera del occiso un calendario de la coalición política Convergencia Democrática. Este hecho habría bastado para que le dijeran a la familia que Méndez Cruz era guerrillero. Los familiares niegan cualquier filiación política de Méndez Cruz.

42. Según un testigo escuchado personalmente por el Representante Especial, el día 21 de junio de 1991, José Ernesto Sorto Luna, capitán del autodenominado Ejército Nacional para la Democracia del FMLN, fue a visitar a su madre en su domicilio ubicado en el caserío Plan del Carbón, cantón Los abelines, jurisdicción de Guatajiagua, Departamento de Morazán. Iba solo, desarmado y vestido de civil. Al día siguiente, mientras se encontraba sentado con un hijo pequeño en el patio de la casa, fue sorprendido por un grupo de aproximadamente 30 soldados del destacamento militar No. 4, quienes le dispararon hiriéndole mortalmente. Los soldados habrían registrado el cadáver y recogido el dinero que portaba, un reloj, una cadena de oro, e incluso la dentadura postiza con dos coronas y un puente de oro. Posteriormente, los soldados registraron la vivienda de la madre, en busca de armas. Al no encontrarlas, se retiraron del lugar, amenazando de muerte a la madre si denunciaba los hechos. Según testigos presenciales, los soldados no intentaron capturar a la víctima, procediendo a disparar apenas lo ubicaron. La madre de la víctima, Francisca Sorto Arqueta, manifiesta que otros cuatro hijos suyos han sido muertos también por el ejército.

43. Según declaración de un testigo escuchado en San Salvador por el Representante Especial, el día 28 de junio de 1991, Carlos Orlando Gallardo, de 32 años, casado, comerciante, abordó un autobús en San Salvador para dirigirse a Suchitoto, donde residía. Al llegar al puente "Las Guaras", jurisdicción de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán, el autobús fue detenido por un retén de soldados pertenecientes al destacamento militar No. 5, presuntamente al mando del Teniente Portillo. Los soldados ordenaron a los pasajeros que descendieran del autobús y que formaran una fila de hombres y otra de mujeres. Gallardo se habría negado a formar fila, luego a entregar su dinero al cabo que lo registraba, siendo insultado y golpeado por éste, quien informó de lo sucedido al Teniente. El Teniente ordenó a los pasajeros subir al autobús y al motorista seguir hacia Suchitoto, deteniendo a Gallardo. Al partir el autobús, Gallardo habría corrido hacia él, siendo alcanzado por los disparos del cabo. El Teniente se habría negado a las peticiones del conductor y de los pasajeros de regresar a San Salvador transportando al herido, y ordenó que siguieran su camino hacia Suchitoto. En Suchitoto, se ordenó el traslado del herido a San Salvador, muriendo éste en el trayecto. El cabo se encuentra en prisión pero el teniente estaría en libertad. Los pasajeros del autobús han manifestado su temor de prestar declaraciones testimoniales sobre los hechos, pues se ven obligados a transitar por dicho retén con frecuencia.

44. El día 25 de agosto de 1991, soldados de la fuerza aérea salvadoreña, habrían disparado sobre José Dimas, activista de la comunidad 16 de marzo, cuando paseaba con otros compañeros; herido en una pierna, habría sido posteriormente rematado 23/.

45. Al igual que en años anteriores, el Representante Especial ha recibido amplia información sobre ejecuciones sumarias y otras graves violaciones de los derechos humanos, políticamente motivadas, que se imputan a los llamados "escuadrones de la muerte". De acuerdo a las fuentes informantes, tales escuadrones estarían vinculados a miembros de la Fuerza Armada y Cuerpos de Seguridad, o tolerados o protegidos por ellos, afirmación que parece en

principio verosímil, aunque el Representante Especial debe señalar que las circunstancias en que actúan los repetidos escuadrones no contribuyen precisamente a facilitar la investigación de los hechos concretos que se les atribuyen. No hay que descartar, además, que al amparo de las actividades de los "escuadrones de la muerte", se encubran delitos de carácter común.

46. En todo caso, Tutela Legal del Arzobispado comunica las siguientes ejecuciones sumarias atribuidas a los "escuadrones de la muerte" durante los meses transcurridos de 1991, cifras que se comparan con las del año pasado. Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos (gubernamental) establece las siguientes cifras de muertes de civiles a consecuencia de acciones de personas no identificadas:

Ejecuciones sumarias políticamente motivadas imputables a los denominados escuadrones de la muerte		Muerte de civiles a consecuencia de personas no identificadas
Fuente: Tutela Legal		Fuente: Comisión de Derechos Humanos (gubernamental)
	1990	1991
Enero	9	19
Febrero	4	18
Marzo	8	23
Abril	8	10
Mayo	3	17
Junio	5	10
Julio	8	27
Agosto	6	17
Total (hasta agosto)	51	141

47. Algunos hechos específicos atribuidos a los escuadrones de la muerte, son los que se describen a continuación.

48. El día 11 de marzo de 1991, apareció en una carretera cercana a Santa Ana el cadáver de Isaac Martínez, quien había sido candidato de Convergencia Democrática en las pasadas elecciones. El cadáver presentaba heridas de machete y signos de tortura 24/. Sin embargo, la documentación judicial entregada al Representante Especial por la Comisión de Derechos Humanos (gubernamental) de El Salvador revelaría que el Sr. Martínez fue víctima de un crimen común perpetrado por familiares.

49. El día 19 de mayo de 1991, Gustavo Rosa Ramírez Aguilar fue asesinado por disparos en su casa, en la localidad de El Charcón, Departamento de La Libertad, en presencia de su compañera de vida y tres hijos menores. El Sr. Rosa era un desplazado y las circunstancias de su muerte, incluyendo el hecho de su

detención por miembros de la Policía Nacional, tres semanas antes, hacen pensar a algunas organizaciones no gubernamentales locales que el crimen fue perpetrado por individuos vinculados a fuerzas gubernamentales 25/.

50. El día 8 de julio de 1991, apareció el cadáver, brutalmente mutilado, de Martín Ayala Ramírez, miembro del Consejo de Comunidades Marginales, en los locales de dicha organización en San Salvador. Su esposa, María Leticia Campos, sufrió heridas graves en el mismo ataque. Organizaciones no gubernamentales locales atribuyeron los crímenes a "escuadrones de la muerte" 26/. El día 6 de agosto siguiente, la Comisión de Hechos Delictivos presentó a la televisión a los presuntos autores de los crímenes, quienes habrían declarado que la motivación fue el robo. Estas explicaciones no convencieron a los responsables del Consejo de Comunidades Marginales 27/. El Representante Especial tuvo ocasión de entrevistarse en las penitenciarías salvadoreñas con los presuntos autores de los hechos: las abiertas contradicciones en que incurrieron hacen pensar que no son ellos quienes cometieron el crimen.

51. Según testimonio recibido en El Salvador por el Representante Especial, a las 7 de la tarde del día 3 de agosto de 1991 seis hombres vestidos de civil capturaron a dos muchachos, que fueron asesinados aquella noche.

52. Se hacen constar por lo demás los comunicados amenazantes de algunas organizaciones contra personas sospechosas de pertenecer al FMLN e incluso contra aquellos que colaboren con ONUSAL y funcionarios de esta misión de las Naciones Unidas 28/. En San Salvador el Representante Especial pudo ver con sus propios ojos algunos de estos comunicados, en especial el dirigido por el llamado "Frente Anticomunista Salvadoreño" contra la militante de CRIPDES, Mirtala López. El Representante Especial expresó en el Estado Mayor de la Fuerza Armada su preocupación por estos comunicados. La respuesta fue que se estaba investigando los hechos y que se barajaba la hipótesis alternativa de que las amenazas proviniesen de un grupo de extrema izquierda o de extrema derecha.

53. Teniendo muy presentes las cautelas metodológicas antes expuestas y tomando en consideración el conjunto de la información a que ha tenido acceso el Representante Especial, es posible concluir que durante los meses transcurridos de 1991 ha persistido la práctica de ejecuciones sumarias por parte de elementos del aparato estatal, particularmente por miembros de la Fuerza Armada y defensa civil. El Representante Especial comprueba con todo que la cifra de estas violaciones es levemente inferior a la del año pasado. Es ésta también la opinión de fuentes independientes de absoluta fiabilidad. En cualquier caso, y al igual que el año pasado, el Representante Especial expresa su preocupación por la atmósfera de amenazas a sectores particulares de la población - particularmente los integrantes de movimientos sindicales, campesinos y habitantes de comunidades repobladas -, que se dicen expuestos a las peores represalias.

54. En lo que atañe a ejecuciones sumarias imputables a las organizaciones guerrilleras, el Representante Especial ha recibido también amplia información. Así, según Tutela Legal y la Comisión de Derechos Humanos (gubernamental) las cifras son las siguientes:

	Ejecuciones sumarias imputables a las organizaciones guerrilleras <u>Fuente: Tutela Legal</u>		Muertes de población civil a consecuencia de actos terroristas <u>Fuente: Comisión de Derechos Humanos (gubernamental)</u>	
	<u>1990</u>	<u>1991</u>	<u>1990</u>	<u>1991</u>
Enero	0	3	13	5
Febrero	1	0	2	4
Marzo	0	1	7	3
Abril	2	1	5	1
Mayo	3	3	6	5
Junio	2	2	4	5
Julio	4	2	6	4
Agosto	<u>0</u>	<u>3</u>	<u>6</u>	<u>3</u>
Total (hasta agosto)	12	15	49	30

55. El Representante Especial ha recibido también información específica sobre ejecuciones sumarias equivalentes a asesinatos imputados a las organizaciones guerrilleras que, de manera selectiva y no exhaustiva, se recoge en los párrafos que siguen:

56. En carta del 11 de abril de 1991 dirigida al Representante Especial por el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador, se atribuye a comandos del FMLN la ejecución sumaria perpetrada el 22 de marzo de 1991 en Ahuachapán en la persona del caporal mayor de una finca. En El Salvador el Representante Especial no pudo obtener información adicional sobre estos hechos.

57. Según testimonio escuchado directamente en El Salvador por el Representante Especial, el día 8 de abril de 1991 Guillermo Hernández Rosales, de 27 años, desertor del Centro Técnico de Instrucción Policial de la Fuerza Armada (CETIPOL), fue secuestrado por miembros del Frente Central "Modesto Ramírez" del FMLN, cuando se dirigía al Caserío La Mora, cantón El Zapote, jurisdicción de Suchitoto, departamento de Cuscatlán. Un miembro de la Dirección de la Zona Norte del Cerro de Guazapa del Frente mencionado, Tito Ruíz, informó que Hernández Rosales fue interrogado sobre sus actividades y confesó ser un zapador (infiltrado entre la población civil de las zonas conflictivas con la misión de informar a la Fuerza Armada sobre los movimientos de la guerrilla). El 10 de abril, el mando de dirección de la Zona Norte de Guazapa ordenó su fusilamiento, que tuvo lugar en Mango Mocho, cantón San Antonio, jurisdicción de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, a las 18.00 horas del día señalado.

58. El FMLN ha dirigido también amenazas individuales de ejecuciones sumarias. Así, el Representante Especial ha tenido noticias de amenazas graves dirigidas por el FMLN a ciertos alcaldes; ha podido leer en concreto la

misiva enviada al alcalde de una localidad del Departamento de Usulután, en que se conminaba al alcalde a renunciar a sus fueros pues, en caso contrario - dice la misiva - se expondría a represalias 29/. Según la misma fuente "nueve alcaldías de 16 poblaciones del Departamento de Usulután, funcionaban en el exilio, debido a las graves amenazas del FMLN, encontrándose varias poblaciones de dicho Departamento sin el básico servicio de alcaldías".

B. Capturas, secuestros y desapariciones

59. Las organizaciones no gubernamentales explicaron en San Salvador al Representante Especial que durante los meses transcurridos de 1991 continuaron las detenciones de personas por motivos políticos. Varios testigos declararon también haber sido objeto de capturas, aunque por lo general la liberación se produjo dentro de las 72 horas siguientes. Las capturas se producen, sin duda, pero el Representante Especial reconoce de nuevo la facultad de las autoridades salvadoreñas para detener a las personas que atenten por medios violentos contra el orden constitucional, siempre que la detención y el procedimiento judicial subsiguiente se ajusten a los estándares constitucionales y a los compromisos internacionales que en materia de derechos humanos ha asumido la República de El Salvador.

60. La Comisión de Derechos Humanos (gubernamental) de El Salvador da las siguientes cifras de capturas:

Capturas imputables al ejército, cuerpos de
seguridad y defensa civil
Fuente: Comisión de Derechos Humanos (gubernamental)
1991

	<u>Total de per- sonas regis- tradas como detenidas</u>	<u>Personas que fueron consignadas</u>	<u>Personas que fueron remitidas a otras instituciones 1/</u>	<u>Personas puestas en libertad</u>
Enero	102	25	8	69
Febrero	56	17	5	34
Marzo	24	4	0	20
Abril	64	8	5	51
Mayo	107	27	5	75
Junio	100	30	2	68
Julio	86	10	2	74
Agosto	<u>33</u>	<u>5</u>	<u>2</u>	<u>26</u>
Total (hasta agosto)	572	126	29	417

1/ Dirección General de Migración; Alcaldías municipales; hospitales psiquiátricos, etc.

61. Por su parte, Tutela Legal proporciona las siguientes estadísticas:

Capturas imputables al ejército, cuerpos de seguridad y defensa civil

Fuente: Tutela Legal

	Total de personas capturadas y no liberadas		Personas capturadas actualmente en detención		Personas capturadas y posteriormente desaparecidas	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Enero	68	17	50	14	18	3
Febrero	65	10	54	9	11	1
Marzo	38	13	29	9	9	4
Abril	38	21	23	14	15	7
Mayo	34	31	18	24	16	7
Junio	34	31	30	30	4	1
Julio	34	13	28	13	6	0
Agosto	5	9	4	9	1	0
Total (hasta agosto)	316	145	236	122	80	23

62. Respecto a las desapariciones forzadas o involuntarias, la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado proporciona las siguientes cifras correspondientes a los meses transcurridos de 1991 y sus equivalentes de 1990:

Desapariciones forzadas o involuntarias

Fuente: Tutela Legal

	Total de personas desaparecidas		Personas desaparecidas luego de ser capturadas por el ejército, cuerpos de seguridad o defensa civil		Personas desaparecidas luego de ser secuestradas por la guerrilla		Personas desaparecidas sin conocerse las circunstancias del hecho o los presuntos responsables	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Enero	31	11	18	3	3	1	10	7
Febrero	19	14	11	1	0	2	8	11
Marzo	20	11	9	4	0	1	11	6
Abril	21	12	15	7	0	1	6	4
Mayo	27	15	16	7	1	2	10	6
Junio	14	8	4	1	2	1	8	6
Julio	14	7	5	0	1	1	7	6
Agosto	4	9	1	0	0	0	3	9
Total (hasta agosto)	150	87	80	23	7	9	63	55

63. También por parte de las organizaciones guerrilleras se han realizado secuestros y reclutamientos forzosos de personas. Las cifras que suministra Tutela Legal y la Comisión de Derechos Humanos (gubernamental) son las siguientes:

	<u>Personas secuestradas y reclutadas forzosamente por la guerrilla</u>						<u>Fuente: Comisión de Derechos Humanos (gubernamental)</u>	
	<u>Fuente: Tutela Legal</u>						<u>Población civil secuestrada por el FMLN</u>	
	<u>Total (Tutela Legal)</u>		<u>Personas secuestradas por la guerrilla</u>		<u>Personas reclutadas forzosamente por la guerrilla</u>			
	<u>1990</u>	<u>1991</u>	<u>1990</u>	<u>1991</u>	<u>1990</u>	<u>1991</u>	<u>1990</u>	<u>1991</u>
Enero	3	1	3	1	0	0	31	4
Febrero	0	2	0	2	0	0	5	7
Marzo	0	1	0	1	0	0	8	2
Abril	0	1	0	1	0	0	25	6
Mayo	1	2	1	2	0	0	3	11
Junio	2	1	2	1	0	0	10	1
Julio	7	1	1	1	6	0	1	2
Agosto	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>4</u>
Total (hasta agosto)	13	9	7	9	6	0	84	37

64. Según información de la Comisión de Derechos Humanos (gubernamental) de El Salvador, el 18 de junio de 1991 el FMLN habría secuestrado al subteniente del Ejército Pedro A. Hernández Pérez, cuando disfrutaba de permiso, exigiendo una cantidad por su rescate. Pagada ésta por los padres, el subteniente fue liberado el día 8 de septiembre siguiente.

65. De otro lado, a fines de julio de 1991, fue secuestrado el empresario salvadoreño Gregorio Zelaya. En comunicado de 5 de agosto siguiente, el FMLN reconoció ser el responsable del secuestro 30/, acusando a Zelaya de no pagar impuestos de guerra y de organizar "escuadrones de la muerte". El día 23 de agosto, el FMLN liberó al empresario 31/. El Representante Especial supo en San Salvador que la liberación se hizo previo pago en seis plazos de una cantidad.

66. En fin, múltiples fuentes han informado al Representante Especial que el FMLN continúa practicando reclutamientos forzosos, incluso en jóvenes de ambos sexos menores de edad.

C. Trato a los presos políticos

67. La Comisión de Derechos Humanos (no gubernamentales) de El Salvador ha enviado un documento al Representante Especial 32/ que contiene una recopilación de los casos de tortura de personas detenidas por motivos políticos durante los cuatro primeros meses de 1991; la recopilación incluye 34 casos, que se imputan, todos ellos, a componentes del aparato del Estado.
68. Durante su visita al país, el Representante Especial examinó a una muestra relativamente amplia de antiguos o actuales presos políticos. Al igual que el pasado año, los presos pertenecientes a organizaciones hicieron el mismo esquema de declaración: interrogatorios muy largos con los ojos vendados, sin poder sentarse o dar alivio a sus necesidades físicas, golpes abundantes, y en ocasiones empleo de una capucha que imposibilita la respiración y provoca el desmayo físico, inmersión de la cabeza en pilas de agua, choques eléctricos y amenazas a ellos mismos o a familiares. Según algún testimonio, la tortura tenía por fin la confesión pública de la autoría de un delito no cometido. Los testigos no organizados sólo se quejaron de interrogatorios rigurosos con los ojos vendados.
69. El Representante Especial debe admitir que el número y condición de testigos que le resultó posible interrogar personalmente no le permiten establecer con precisión el porcentaje de los sometidos a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; la práctica persiste, desde luego, aunque en su opinión no obedece a una política institucionalizada; el que un detenido sea o no sometido a ella depende de una serie de factores coyunturales, como el interés de la información que pueda transmitir, la situación militar del conflicto, la identidad de los captores y otros.
70. Por lo demás, en su visita al Centro penal "La Esperanza" (Mariona), el Representante Especial pudo comprobar el hacinamiento en que vivían los reclusos y las preocupantes condiciones de inseguridad en que se desenvolvían. En efecto, no es infrecuente la muerte de algún recluso a manos de sus compañeros de prisión.
71. De acuerdo a diversas fuentes y a testimonios escuchados directamente por el Representante Especial, hacia las 20.00 horas del día 17 de junio de 1991, miembros del FMLN atacaron la penitenciaría de Mariona, la más importante del país, liberando y entregando armas a 35 presos políticos y violentando las celdas ocupadas por los presos comunes. Durante la fuga se produjo una refriega entre los vigilantes del penal y los combatientes de la guerrilla, resultando tres reclusos muertos dentro del penal y seis fuera del mismo. Según un testimonio recibido por el Representante Especial, otro recluso habría muerto al día siguiente a consecuencia de disparos de los vigilantes penitenciarios en incidentes que tuvieron lugar en el interior de la prisión.

D. La justicia penal

72. El Representante Especial ha puesto de relieve insistentemente en los informes que viene redactando desde 1981 su preocupación por el insatisfactorio funcionamiento de conjunto de la justicia penal salvadoreña, aunque no ha dejado de reconocer las dificultades existentes al respecto ni tampoco la encomiable actitud de profesionalidad e independencia de algunos órganos judiciales; actitud que no consigue sin embargo que la situación de conjunto del sistema alcance los estándares enunciados en la Constitución vigente y en los instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos obligan a la República de El Salvador.

73. En lo que respecta a los meses transcurridos de 1991, el Representante Especial debe dar cuenta en primer lugar de la celebración de la vista pública en el procedimiento instruido por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y otras dos personas el 16 de noviembre de 1989. La vista comenzó el jueves 26 de septiembre de 1991 y terminó el sábado 28. En la noche de este día, el tribunal de conciencia (jurado), integrado por cinco ciudadanos salvadoreños, emitió veredicto declarando la culpabilidad del coronel Benavides por todas las muertes, y la del teniente Mendoza por la muerte de la niña de 15 años Celina Ramos. Respecto al resto de los acusados, todos ellos componentes de la Fuerza Armada, el Tribunal de Conciencia declaró no tener la íntima convicción de su responsabilidad por los asesinatos y ello pese al hecho de existir confesiones que admitían su participación en los hechos. Cualquiera que sea el juicio moral que merezca esta sorprendente absolución - en la que parece subyacer la apreciación de la eximente de obediencia debida - conviene resaltar la importancia del hecho de la condena de un coronel y de un teniente del Ejército por violación de los derechos humanos. El veredicto constituye un precedente significativo que no sería justo menospreciar en el contexto actual de la justicia penal salvadoreña. El Representante Especial comparte sin embargo, con muchos sectores de opinión pública local e internacional, y particularmente con organizaciones humanitarias no gubernamentales de ámbito local e internacional, la duda fundada en cuanto a la existencia de posibles autores intelectuales de los asesinatos. Hay que preguntarse, en efecto, si decisión tan grave en consecuencias de todo orden como la de acabar con las vidas de los padres jesuitas pudo ser tomada únicamente por un coronel que, al parecer y, según múltiples fuentes, se caracterizaba por su profundo sentido la disciplina y exquisita obediencia al mando.

74. En suma, aunque el resultado del juicio por el asesinato de los padres jesuitas constituye un dato importante en la más reciente historia de la justicia penal salvadoreña, el paso dado parece haber sido insuficiente. A juicio del Representante Especial la investigación judicial debería continuar para determinar de una vez por todas la posible existencia de autores intelectuales en la perpetración del crimen y encausar y castigar en su caso a las personas en cuestión.

75. En lo que se refiere al procedimiento instruido por la ejecución masiva de campesinos en San Sebastián, perpetrada el 21 de septiembre de 1988, informaron las autoridades competentes al Representante Especial que figura implicado un mayor del Ejército, y que todo está dispuesto para la celebración en breve de la vista pública ante un jurado; vista que se ha querido posponer a la del procedimiento seguido por el asesinato de los padres jesuitas y otras personas.
76. El Fiscal General de la República 33/ informó asimismo al Representante Especial que el procedimiento por el caso de la matanza masiva del Cantón El Zapote, perpetrado el 21 de enero de 1991, se encuentra en fase de instrucción, estando detenidas varias personas como autores intelectuales y materiales de los hechos. El Fiscal dio cuenta también del procedimiento penal instruido por la muerte de dos asesores norteamericanos, el día 2 de enero de 1991, después de ser abatido por Fuerzas del FMLN el helicóptero en que se trasladaban. El procedimiento se sigue contra miembros de la guerrilla, presuntos autores del asesinato, y se encuentra en fase de instrucción.
77. Poniendo de relieve el indudable interés de los datos recogidos en los párrafos anteriores, el Representante Especial no puede menos que dejar constancia de la falta de progreso de los procedimientos penales instruidos por muchas otras graves violaciones de los derechos humanos cometidas en El Salvador. En efecto, no se ha registrado avance alguno en las actuaciones seguidas por el asesinato, en marzo de 1980, del arzobispo de San Salvador Monseñor Romero; ni en las iniciadas por el asesinato de Herbert Anaya, cometido en octubre de 1987; ni en las instruidas por el asesinato masivo de sindicalistas de FENASTRAS en octubre de 1989; ni tampoco en las seguidas por muchísimas otras violaciones de los derechos humanos de las que ha dado cuenta el Representante Especial en los informes que viene redactando desde 1981 por encargo de la Comisión de Derechos Humanos.
78. Así pues, y aunque en 1991 haya que registrar datos significativos en la actuación de la justicia penal salvadoreña, el progreso de conjunto es insuficiente. Pero en este punto, y al igual que el año pasado, el Representante Especial quiere hacer la siguiente precisión: las fallas y deficiencias se producen mucho más en el campo de la investigación de los delitos - confiado ahora no al Poder Judicial sino a la Comisión de Hechos Delictivos, que depende del Poder Ejecutivo - que en la actividad propiamente juzgadora de jurados, jueces y tribunales. Estos últimos tienen que dictar sentencia sobre la base de los hechos establecidos en la investigación, y a juicio del Representante Especial es ésta la que resulta en muchos casos sumamente criticable. En este orden de ideas el Representante Especial no puede sino instar a los poderes constitucionales de El Salvador a que la proyectada adscripción de la Comisión de Hechos Delictivos a la Fiscalía General de la República se haga lo antes posible, aunque no oculta que a su juicio lo ideal sería que la investigación de los hechos dependiese del Poder Judicial.

79. El Representante Especial quiere referirse finalmente a los datos que le transmitió el Presidente de la Corte Suprema en el contexto de la mejoría progresiva del funcionamiento de la justicia penal salvadoreña. Así el nivel de frustración de las vistas públicas ha pasado del 75% al 30%; ha aumentado también el número de sentencias condenatorias (80 en lo que va del año), y el número de reos sin condena ha pasado de 93% al 78%, gracias a la promulgación y aplicación de la ley de 21 de abril de 1991 34/.

V. EL RESPETO AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
EN EL CONFLICTO ARMADO

80. Según la información de Tutela Legal, las cifras de personas muertas por el Ejército en acciones militares, sin que pueda determinarse cuántas pertenecen a la población civil y cuántas a combatientes de la guerrilla son las siguientes:

Personas muertas por el ejército en operaciones militares,
emboscadas, enfrentamientos y patrullajes, sin que pueda
determinarse cuántas pertenecen a la población civil y
cuántas a combatientes de la guerrilla por falta de
investigación in situ - Fuente: Tutela Legal

	<u>1990</u>	<u>1991</u>
Enero	134	40
Febrero	84	26
Marzo	71	93
Abril	37	78
Mayo	54	42
Junio	69	43
Julio	50	120
Agosto	<u>63</u>	<u>63</u>
Total (hasta agosto)	566	505

81. De otro lado, la Comisión de Derechos Humanos (gubernamental) establece las siguientes cifras sobre pobladores civiles muertos durante enfrentamientos entre la Fuerza Armada y la guerrilla:

Muertos población civil a consecuencia de enfrentamientos
entre la Fuerza Armada y el FMLN

Fuente: Comisión de Derechos Humanos (gubernamental)

	<u>1991</u>
Enero	0
Febrero	0
Marzo	0
Abril	1
Mayo	0
Junio	17
Julio	1
Agosto	<u>0</u>
Total (hasta agosto)	19

82. Tutela Legal reprocha al ejército la muerte de civiles a consecuencia del contacto con artefactos explosivos de acuerdo a las siguientes cifras:

Muerte de civiles a consecuencia del contacto con
artefactos explosivos colocados por el ejército

Fuente: Tutela Legal

	<u>1990</u>	<u>1991</u>
Enero	0	0
Febrero	0	0
Marzo	0	2
Abril	0	1
Mayo	0	0
Junio	0	0
Julio	0	0
Agosto	<u>0</u>	<u>0</u>
Total (hasta agosto)	0	3

83. Al igual que en años anteriores, el Representante Especial ha recibido información específica sobre operaciones de la Fuerza Armada que habrían ocasionado víctimas en la población civil de las zonas conflictivas y daños en sus propiedades y cosechas. Así, el 16 de abril de 1991, el ejército habría realizado operaciones contra la población de las comunidades repobladas de San José Las Flores, San Antonio Los Ranchos, Guarjila y Arcatao, amenazando a las personas, capturando y torturando a algunas de ellas y destruyendo sus enseres y cosechas, todo ello bajo la acusación de que los residentes en la zona ayudaban a la guerrilla del FMLN 35/. Algunos testigos interrogados en El Salvador por el Representante Especial confirmaron estos hechos. Otros testigos se refirieron a las operaciones de acoso, seguidas de amenazas,

/...

destrucción de bienes y cosechas y capturas, que la Fuerza Armada desencadenó los días 17 y 18 de agosto en la localidad repoblada "Segundo Montes" al objeto de amedrentar a la población bajo el pretexto de que ayudaba a guerrilleros. El Representante Especial escuchó asimismo testimonios según los cuales el día 4 de septiembre de 1991 el ejército disparó desde un cerro cercano a la localidad repoblada de San José Las Flores, causando la muerte de una niña de 9 meses y heridas de bala en otros pobladores. A todos los testigos en cuestión preguntó el Representante Especial si en el momento de las operaciones había fuerzas del FMLN entre ellos; la respuesta fue negativa. En cuanto a los hechos del 17 y 18 de agosto estima la ONUSAL que no existen pruebas determinantes de que el FMLN se encontrara en la comunidad en el momento de los hechos. En lo que se refiere a los acontecimientos del 4 de septiembre en San José Las Flores, la ONUSAL no pudo determinar si elementos del FMLN estaban o no presentes en la comunidad en el momento en que ocurrieron 36/.

84. Según declaración de un testigo escuchado personalmente por el Representante Especial en San Salvador, el día 8 de abril de 1991 la Fuerza Armada desencadenó un ataque en las cercanías del caserío "El Planón", departamento de Usulután. El fuego de fusilería fue acompañado por bombardeo de la aviación, y una de las bombas causó la muerte de la esposa y una hija del declarante además de heridas a otros hijos y al propio testigo. Según el declarante, el FMLN estaba muy cerca, aunque ni él ni su familia tenían relación alguna con la guerrilla.

85. El Representante Especial expresó al Ministro de Defensa y al Estado Mayor de la Fuerza Armada su preocupación por la información que figura en los párrafos anteriores. En cuanto a la muerte de la niña de 9 meses en San José Las Flores la respuesta fue que era imposible que la bala procediese de la Fuerza Armada dado que sus armas de fusilería no podían alcanzar desde la posición ocupada - el cerro "La Bola" - a la localidad; añadieron por lo demás que en todos los casos referidos el FMLN estaba presente y que las localidades en cuestión sirven de bases de aprovisionamiento o descanso para la guerrilla.

86. El Representante Especial fue informado también de que víveres y medicamentos enviados por organizaciones humanitarias a localidades de las zonas conflictivas son interceptados por la Fuerza Armada en múltiples ocasiones bajo el pretexto de que es el FMLN quien se beneficia de dichos envíos.

87. Por otra parte, el Representante Especial ha recibido información del FMLN concerniente a presuntas ejecuciones por miembros de la Fuerza Armada de combatientes heridos. Así, según la organización guerrillera, el 11 de abril de 1991 el ejército habría tendido una emboscada a una unidad del FMLN comandada por Antonio Cardenal; este último, gravemente herido, habría intentado huir, y en la persecución habría sufrido nuevos disparos que le causaron la muerte. La versión que de este hecho dio el Estado Mayor de la Fuerza Armada al Representante Especial es distinta: el Sr. Cardenal habría muerto en la persecución que siguió a la emboscada. De acuerdo a otras informaciones del FMLN, en nueva emboscada montada por el ejército el 3 de julio de 1991 habrían resultado gravemente heridos los guerrilleros Turcio y Mira; componentes de la Fuerza Armada los habrían ejecutado a continuación.

Según el Estado Mayor, sin embargo, ambos guerrilleros murieron en el combate. Dadas las dificultades de investigación de esta clase de hechos, el Representante Especial lamenta no poder llegar a conclusiones más precisas sobre informaciones tan graves, aunque recuerda en todo caso la obligación imperiosa que pesa sobre ambos contendientes de observar escrupulosamente las normas de derecho internacional humanitario que imponen el respeto a la vida e integridad física de los combatientes heridos.

88. Poniendo de relieve las dificultades de la investigación de los hechos relatados, y teniendo en cuenta el conjunto de la información a que ha tenido acceso el Representante Especial, su convicción sigue siendo que la condición de la población civil que se encuentra en zonas conflictivas es harto dura y penosa y que ambos contendientes - Fuerza Armada y FMLN - deberían esforzarse al máximo por evitar que esa población sufra las consecuencias del conflicto. El Representante Especial considera también que con ocasión de los combates con el FMLN, la Fuerza Armada ha producido muertes y lesiones en la población civil, aunque no de manera deliberada, indiscriminada y generalizada sino por descuido y con carácter ocasional. Las dificultades de la investigación imposibilitan determinar con exactitud la cifra exacta de tales casos, aunque en su opinión tal cifra es más baja que la del pasado año. La Fuerza Armada ocasiona también daños en bienes públicos y privados aunque después de combates encarnizados puede resultar difícil determinar cuál de los dos contendientes, si el ejército o la guerrilla, es el responsable de los daños.

89. En lo concerniente a las víctimas civiles causadas por las acciones militares de la guerrilla, la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado y la Comisión de Derechos Humanos (gubernamental) dan las siguientes cifras de personas muertas a consecuencia del contacto con artefactos explosivos colocados por la guerrilla:

	Muertes de civiles a consecuencia del contacto con artefactos explosivos colocados por la guerrilla			
	Fuente: Tutela Legal		Fuente: Comisión de Derechos Humanos (gubernamental)	
	1990	1991	1990	1991
Enero	0	0	6	3
Febrero	0	2	1	3
Marzo	0	0	2	1
Abril	0	2	2	1
Mayo	1	1	7	4
Junio	1	3	3	4
Julio	1	0	3	2
Agosto	0	0	3	2
Total (hasta agosto)	3	8	27	20

90. Por otra parte, Tutela Legal suministra las cifras siguientes, sobre la muerte de civiles a consecuencia del contacto con artefactos explosivos, sin que haya podido determinarse quiénes fueron los responsables de su colocación:

Muertes de civiles a consecuencia del contacto con artefactos explosivos sin conocerse los responsables de su colocación		
Fuente: Tutela Legal		
	<u>1990</u>	<u>1991</u>
Enero	4	0
Febrero	0	0
Marzo	0	1
Abril	2	1
Mayo	0	0
Junio	3	0
Julio	1	2
Agosto	<u>1</u>	<u>0</u>
Total (hasta agosto)	11	4

91. En cuanto a la población civil lesionada a consecuencia del contacto con artefactos explosivos colocados por organizaciones del FMLN, la Comisión de Derechos Humanos (gubernamental) de El Salvador da las siguientes cifras:

	<u>1990</u>	<u>1991</u>
Enero	14	5
Febrero	17	17
Marzo	22	10
Abril	16	19
Mayo	11	26
Junio	25	16
Julio	11	15
Agosto	<u>22</u>	<u>19</u>
Total (hasta agosto)	138	127

92. En su informe de 1991 a la Comisión de Derechos Humanos, el Representante Especial dio cuenta del asesinato de dos asesores militares norteamericanos, en uno de los primeros días de enero de 1991, después de que el helicóptero en que se trasladaban fuese alcanzado por el FMLN 37/. En comunicado dirigido por el Frente al Representante Especial se reconoció la existencia de elementos suficientes para presumir que una parte de la tripulación pudo haber sido asesinada por uno o varios miembros de la unidad militar. En comunicado

decidió transferir el caso a la Comisión de la Verdad próxima a crearse, sin perjuicio de haber pedido al Gobierno suizo el confinamiento de los acusados en su territorio hasta que aquella Comisión pueda asumir el caso. Se añade en el comunicado la disposición de poner a los presuntos responsables a disposición de la justicia salvadoreña cuando la Asamblea Legislativa haga reformas del poder judicial lo que "no implica que el FMLN renuncia a la responsabilidad de administrar justicia con sus leyes y tribunales" 38/.

93. Según la prensa internacional 39/ el ataque realizado por el FMLN el 20 de febrero de 1991 a dos bases militares de la ciudad de San Miguel habrían causado la muerte de dos niños. La prensa local informa por su parte que el ataque efectuado el 8 de abril de 1991 por el FMLN a la localidad de Quezaltepeque habría ocasionado dos muertos y decenas de heridos en la población civil 40/. Se informa también que con ocasión del ataque realizado el 22 de mayo de 1991 por comandos urbanos del FMLN al cuartel de la Primera Brigada de Infantería en San Salvador, habrían muerto dos mujeres que residían en las casas vecinas y sufrido heridas otras cuatro personas civiles 41/. En El Salvador el Representante Especial no pudo conseguir información adicional sobre estos hechos.

94. De acuerdo a testimonio prestado ante el Representante Especial en San Salvador, el día 12 de marzo de 1991, Ramón Orellana se encontraba en compañía de un amigo, a la orilla de un camino en las inmediaciones de la población de Tenancingo, departamento de Cuscatlán, cuando fue alcanzado por los disparos de un grupo de miembros del FMLN. Momentos después, al ser interrogados por el amigo de la víctima sobre los motivos de los disparos, los miembros de la guerrilla manifestaron que los habían confundido con soldados. Durante el velatorio de la víctima, miembros del FMLN enviaron un mensaje a los familiares pidiéndoles disculpas y manifestándoles que habían matado a Orellana por error. El amigo de la víctima, Lizandro, habría desaparecido de su lugar de residencia dos días después de los hechos.

95. Según la prensa local 42/, Jesús Francisco Valladares, agente de la Policía Nacional, que huía herido hacia Honduras, después del combate, fue asesinado por miembros del FMLN a primeros de abril de 1991 cerca del puesto fronterizo de El Poz. El Representante Especial no pudo obtener en El Salvador información adicional sobre este hecho.

96. De acuerdo a la declaración de un testigo, el día 22 de mayo de 1991, cuatro miembros del FMLN a bordo de un microbús color rojo, realizaron un ataque con morteros contra el cuartel de la Primera Brigada de Infantería en San Salvador. Lanzaron siete morteros; sin embargo, seis de ellos hicieron impacto en seis diferentes viviendas de la colonia Layco, lo cual revela que fueron lanzados sin mayor preocupación por su precisión. Uno de los morteros hizo explosión en la casa número 720.29 de la Calle Poniente. Las esquirlas ocasionaron la muerte de las señoras Gladys Elena Cienfuegos, de 62 años, y Rosa Irma Motúfar de Girón, de 60 años; lesionando a la nieta de ambas, la menor Violeta María Girón Cienfuegos. Estas personas se habían refugiado en la habitación de su vivienda más alejada del cuartel. La vivienda ha quedado semidestruida.

97. De acuerdo a un comunicado de la Fuerza Armada 43/, el 31 de mayo de 1991, guerrilleros del FMLN capturaron en el curso de un combate en el departamento de Morazán al cabo Isidro Pérez Martínez, quien fue posteriormente asesinado por sus captores. El cadáver explotó en pedazos cuando fue recogido.

98. La misma fuente y la prensa local 44/ dan cuenta de que el nacional guatemalteco Jerónimo Cahuas, vendedor ambulante, murió por fuego de la guerrilla con ocasión de un ataque a la carretera troncal norte, el día 3 de junio de 1991.

99. Según testimonio escuchado personalmente por el Representante Especial en San Salvador, el día 22 de julio de 1991, miembros del FMLN iniciaron un ataque con morteros contra el puesto de la Guardia nacional de Guazapa, departamento de San Salvador. Uno de los morteros cayó en una casa habitación de la calle 5 de noviembre, hiriendo mortalmente a la menor Jenifer Sandoval Osorio, y lesionando al menor Yuri Wilfredo Osorio Suárez. Según la abuela de la víctima, los disparos se realizaron a considerable distancia. Su nieta murió a consecuencia de las lesiones producidas por las esquirlas del artefacto explosivo.

100. Según el comunicado del Estado Mayor de la Fuerza Aérea 45/ (de 29 de agosto de 1991), a fines de agosto de 1991, un comando del FMLN interceptó a una ambulancia identificada con signos de la Cruz Roja en la que se trasladaba a un hospital militar a un soldado gravemente herido; a falta de la debida asistencia médica el soldado falleció. Fuentes independientes han confirmado estos hechos al Representante Especial. Un representante del FMLN admitió estos hechos, si bien agregó que no había constancia de que el soldado no hubiera muerto antes de la detención de la ambulancia.

VI. LOS ESFUERZOS PARA MEJORAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS RESULTADOS

101. El día 26 de julio de 1991 se instaló definitivamente en El Salvador la Misión de Observadores de las Naciones Unidas (ONUSAL), integrada desde el 15 de septiembre por 101 funcionarios. Inmediatamente comenzó a actuar la División de Derechos Humanos, prevista en el Acuerdo de San José el 26 de julio de 1990 entre el Gobierno y el FMLN. El 24 de septiembre de 1991 la ONUSAL hizo público su primer informe, seguido del primer informe del Director de la División de Derechos Humanos. El Representante Especial no puede sino encomiar vivamente la buena disposición del Gobierno y del FMLN en cuanto a la creación y funcionamiento de la ONUSAL. Tal actitud constituye muestra inequívoca del interés sincero de ambas partes por asegurar el más cabal cumplimiento de los acuerdos alcanzados, y de los que se puedan conseguir en el futuro.

102. En lo que respecta más especialmente a los esfuerzos de las autoridades constitucionales de El Salvador para mejorar la suerte de los derechos humanos, el Representante Especial señala que encontró nuevamente en el Presidente Cristiani la mejor disposición hacia el respeto de esos derechos.

En este sentido, en el informe sobre su segundo año de Gobierno 46/, el licenciado Cristiani volvió a reafirmar el compromiso institucional de defender los derechos fundamentales del ser humano. Por lo demás, continúan los empeños de otros poderes y organismos oficiales de mejorar la suerte de los derechos humanos. Tales empeños fueron expuestos en detalle en el informe de 1991 a la Comisión de Derechos Humanos 47/ y a ese documento se remite el Representante Especial.

103. En cuanto a otros gestos humanitarios de las autoridades salvadoreñas, el Representante Especial fue informado en el Estado Mayor que la Fuerza Armada permite y facilita la evacuación y asistencia de guerrilleros heridos y lisiados. En este orden de cosas, el Representante Especial quiere recoger el gesto humanitario del traslado de un comandante guerrillero capturado con heridas infectadas en ambas piernas al hospital Rosales de San Salvador, efectuado el 11 de marzo de 1991 con la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja 48/.

104. También por parte del FMLN se han dado gestos humanitarios encomiables, como la tregua unilateral decretada entre el 9 y 11 de marzo con ocasión de la celebración de las elecciones 49/, la anunciada con motivo de la cumbre de los Presidentes Centroamericanos entre el 15 y el 17 de julio 50/, y ha establecido el 13 y 14 de septiembre con motivo de las negociaciones en Nueva York 51/. El Representante Especial quiere referirse asimismo a la devolución por el FMLN, el 8 de abril de 1991 a través del CICR, de siete policías de aduana capturados 52/. Según un comunicado del FMLN, el 22 de mayo siguiente fue entregada a delegado del CICR una joven de 15 años capturada. El Representante Especial ha tenido conocimiento de la liberación de otros combatientes capturados.

105. Aún encomiando los gestos humanitarios descritos en los párrafos anteriores y la disposición de ambas partes para alcanzar lo antes posible una paz negociada, en que el respeto a los derechos humanos sea la realidad cotidiana, el Representante Especial no puede menos que comprobar que durante 1991 se han cometido por una y otra parte graves violaciones de los derechos humanos. A juicio del Representante Especial existe una brecha importante y preocupante entre las intenciones que se proclaman y los resultados que se consiguen.

VII. CONCLUSIONES

106. Después de valorar detenidamente la información recogida en el presente informe sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador durante los meses transcurridos de 1991, el Representante Especial formula las conclusiones que siguen:

Derechos económicos, sociales y culturales

107. La situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos de El Salvador continúa viéndose afectada negativamente por la conjunción de una serie de factores de distinta índole entre los que destaca la persistencia del conflicto armado entre la Fuerza Armada y el FMLN y el consiguiente clima de violencia.

108. También los ataques de las organizaciones guerrilleras del FMLN a componentes de la infraestructura económica del país perjudican gravemente el disfrute presente y futuro de importantes derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos salvadoreños, si bien hay que dejar constancia del hecho de que tales ataques no han revestido la amplitud e intensidad de años pasados.

109. Han persistido durante el presente año las acciones gubernamentales de acoso a organizaciones humanitarias, sindicales, campesinas y comunidades repobladas; el Gobierno alega la docilidad de algunas de esas organizaciones hacia el FMLN, hecho que niegan las organizaciones en cuestión, pero que de ser cierto sólo justificaría acciones conformes a la ley y respetuosas de los derechos humanos.

Ejecuciones sumarias

110. Miembros del aparato estatal, particularmente de la Fuerza Armada y de la Defensa Civil, han continuado perpetrando ejecuciones sumarias políticamente motivadas, en número difícil de determinar con exactitud pero en niveles levemente inferiores a los del pasado año. Dato preocupante es la persistencia del clima de intimidación en ciertos sectores de la población a consecuencia de amenazas explícitas de ejecuciones sumarias u otras violaciones de los derechos humanos.

111. Numerosas fuentes continúan imputando ejecuciones sumarias y otras violaciones de los derechos humanos a los llamados "escuadrones de la muerte", a los que se supone conectados con la Fuerza Armada o Cuerpos de Seguridad o tolerados por dicha fuerza y cuerpos. El Representante Especial encuentra verosímil en principio dicha imputación, aunque las dificultades de investigación de tal tipo de crímenes no le permiten llegar a conclusiones seguras y definitivas en casos específicos; no excluye de otra parte que bajo la apariencia de esas actividades se encubran delitos comunes.

112. Por su parte, el FMLN ha seguido perpetrando ejecuciones sumarias de presuntos colaboradores de la Fuerza Armada, aunque en número ligeramente inferior al del año pasado.

Secuestros y desapariciones

113. Han seguido registrándose casos de desapariciones políticamente motivadas de personas, resultando difícil determinar el número de ellas y la identidad de los captores, aunque el Representante Especial no excluye que en algunos casos hayan podido participar escuadrones de la muerte.

114. También las organizaciones guerrilleras han llevado a cabo secuestros de militares fuera del combate y de personas civiles e incluso, en ocasiones, reclutamientos forzosos de menores.

Trato a los presos políticos

115. En los interrogatorios extrajudiciales de los detenidos por razones políticas se ha seguido recurriendo en ocasiones a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, si bien el Representante Especial piensa que estas prácticas no son generalizadas ni obedecen a una política gubernamental.

La justicia penal

116. El veredicto emitido el 25 de septiembre de 1991 por el tribunal de conciencia (jurado) en el caso del asesinato de los padres jesuitas y otras personas en noviembre de 1989, constituye un precedente importante en la justicia penal salvadoreña, aunque el Representante Especial comparte con sectores de opinión local e internacional las dudas fundadas sobre la posible existencia de autores intelectuales que no han sido procesados ni condenados. El Representante Especial muestra en todo caso su preocupación por la falta de progresos significativos de procedimientos penales instruidos por múltiples y graves violaciones de derechos humanos perpetradas en años pasados.

El conflicto armado

117. La situación de la población civil de las zonas más conflictivas sigue siendo harto dura y penosa, particularmente en las comunidades repobladas, y además las acciones bélicas de la Fuerza Armada han producido muertes y lesiones entre los integrantes de aquella población, si bien no de forma general, indiscriminada o intencionada, sino por descuido y con carácter ocasional; la cifra de tales muertes es difícil de determinar con exactitud, aunque resulta inferior a la del año pasado y a la de ejecuciones sumarias fuera de combate.

118. Por su parte el FMLN ha ocasionado muertes o lesiones en personas civiles a consecuencia del contacto con minas explosivas, aunque en ocasiones puede resultar difícil determinar si fueron sus organizaciones o la Fuerza Armada quienes colocaron los artefactos; el fuego de la guerrilla ha seguido causando de manera ocasional otras víctimas civiles.

Los esfuerzos para mejorar el respeto a los derechos humanos y sus resultados

119. El empeño del Presidente de la República y otros poderes constitucionales salvadoreños por mejorar la suerte de los derechos humanos resulta innegable, y aunque ha comportado un ligero descenso en la cifra de graves violaciones de esos derechos, hay que registrar el hecho insoslayable de que persisten las violaciones de carácter grave.

120. También el FMLN ha demostrado interés por el respeto a los derechos humanos, lo cual tampoco ha evitado la comisión de graves violaciones a esos derechos, aunque en número levemente menor que el año anterior.

121. El Gobierno y el FMLN han intensificado el proceso de negociación, bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas, con vistas a una terminación del conflicto, habiendo alcanzado hasta el momento resultados esperanzadores. El Representante Especial piensa de todos modos que la reducción de la violencia dentro y fuera de los combates contribuirá a crear condiciones de confianza recíproca que hagan más viable el éxito definitivo de las negociaciones así como el cumplimiento cabal de los acuerdos conseguidos.

VIII. RECOMENDACIONES

122. El Representante Especial continúa preocupado por la situación de los derechos humanos en El Salvador, pese al hecho de que en los meses transcurridos de 1991 se haya registrado respecto al año 1990 una disminución de la cifra de las violaciones, y consiguientemente insta de nuevo y con el mayor énfasis al Gobierno y a todos los poderes, instituciones y fuerzas políticas del país, incluyendo a las organizaciones guerrilleras, a la adopción inmediata de cuantas medidas puedan conducir a la erradicación total de los atentados contra la vida, integridad y dignidad de las personas tanto en los combates como fuera de ellos.

123. El Representante Especial exhorta asimismo con el mayor énfasis al Gobierno y al FMLN a que en el proceso en curso de negociación sigan dando muestras de realismo político, imaginación y generosidad para con el pueblo salvadoreño, a fin de que se llegue lo antes posible a una paz justa y duradera y a la subsiguiente reconciliación y reconstrucción del país. El Representante Especial recomienda también a ambas partes en conflicto que no sólo traten de imbuir a los sectores sociales más radicalizados una cultura cívica de paz y concordia que asegure el cabal respeto de los acuerdos, sino también que doten a dichos acuerdos de mecanismos e instrumentos eficientes que garanticen su escrupuloso cumplimiento.

124. El Representante Especial reitera particularmente a los poderes constitucionales de la República de El Salvador las recomendaciones contenidas en su anterior informe a la Comisión de Derechos Humanos 53/ y de manera más específica:

- a) La adopción de medidas que impidan toda suerte de amenazas e intimidación psicológica a ciertos sectores de la población;
- b) La persistencia en el impulso a la reforma judicial y la creación de un cuerpo de investigación criminal eficiente que dependa del poder judicial;
- c) La persistencia en el cumplimiento del programa de la reforma agraria y otras reformas estructurales necesarias para un mayor bienestar de la población.

125. Al FMLN y organizaciones guerrilleras el Representante Especial reitera las recomendaciones que formuló en su anterior informe a la Comisión de Derechos Humanos 53/ y en particular:

a) La persistencia firme en la política de no colocar minas de contacto que puedan causar muertes o lesiones en la población civil;

b) La abstención inmediata y completa de cualquier tipo de atentado contra la infraestructura económica del país.

126. Finalmente, el Representante Especial recomienda una vez más a todos los Estados de la Comunidad Internacional, particularmente a los más ricos y desarrollados, intensifiquen la ayuda necesaria para el alivio y la mejora de la suerte de los ciudadanos salvadoreños desplazados, refugiados o reinstalados a consecuencia del conflicto armado.

Notas

- 1/ Press Release SG/SM/4426 de 4 de abril de 1990.
- 2/ El País. Edición del 7 de enero de 1991.
- 3/ Documento S/22060 de 10 de enero de 1991.
- 4/ El País. Edición del 29 de abril de 1991.
- 5/ El Diario de Hoy. Edición del 30 de abril de 1991.
- 6/ Journal de Genève. Edición del 25 y 26 de mayo de 1991.
- 7/ El País. Edición del 3 de junio de 1991, y Le Monde. Edición del 5 de junio de 1991.
- 8/ Inforpress Centroamericana. Edición del 20 de junio de 1991.
- 9/ El País. Edición del 24 de junio de 1991.
- 10/ The Guardian. Edición del 28 de junio de 1991.
- 11/ El Rescate. El Salvador Chronology. Vol. VI, No. 7, julio de 1991.
- 12/ El País. Edición del 19 de julio de 1991, y El Rescate. El Salvador Chronology. Vol. VI, No. 7, julio de 1991.
- 13/ Le Monde. Edición del 30 de agosto de 1991.
- 14/ Central American Labor Defense Network. Urgent Action Bulletin, 18 de marzo de 1991.
- 15/ El Salvador on Line. Edición del 25 de marzo de 1991.
- 16/ Cripdes. Carta de 23 de mayo de 1991.
- 17/ El Salvador on Line. Edición del 22 de abril de 1991.

Notas (continuación)

- 18/ El Salvador on Line. Edición del 19 de agosto de 1991.
- 19/ Oficina de Tutela Legal del Arzobispado. Boletines semanales. Comisión de Derechos Humanos (gubernamental). Informe al Representante Especial.
- 20/ An Americas Watch Report: "El Salvador and Human Rights. The Challenge of a Reform", March 1991, pág. 59.
- 21/ El Salvador on Line. Edición del 4 de marzo de 1991.
- 22/ Comisión de Derechos Humanos (no gubernamental) de El Salvador. Carta al Representante Especial de 1º de julio de 1991.
- 23/ El Salvador on Line. Edición del 2 de septiembre de 1991.
- 24/ El Salvador on Line. Edición del 15 de marzo de 1991.
- 25/ Amnesty International. El Salvador. Killing of Gustavo Rosa Ramírez Aguilar. Junio de 1991, AI Index: AMR 29/07/91.
- 26/ El Salvador on Line. Edición del 15 de julio de 1991; información transmitida al Representante Especial por la Comisión de Derechos Humanos (no gubernamental) de El Salvador, 22 de julio de 1991.
- 27/ Ibid, edición del 12 de agosto de 1991.
- 28/ El Salvador on Line. Edición del 5 de agosto de 1991 y otras informaciones.
- 29/ Fuerza Armada de El Salvador. Estado Mayor Conjunto, El Salvador, 1º de julio de 1991.
- 30/ El Salvador on Line. Edición del 12 de agosto de 1991.
- 31/ El Salvador on Line: Edición del 26 de agosto de 1991.
- 32/ La Tortura en El Salvador. Informe sobre casos denunciados en los primeros cuatro meses de 1991, mayo de 1991.
- 33/ Informe al Representante Especial de 23 de septiembre de 1991.
- 34/ Informe de la Corte Suprema de Justicia al Representante Especial, septiembre de 1991; informe de la Comisión Revisora de la Legislación Salvadoreña al Representante Especial, septiembre de 1991.
- 35/ El Salvador on Line. Edición del 22 de abril de 1991.

/...

Notas (continuación)

- 36/ Primer informe del Director de la División de Derechos Humanos de ONUSAL, San Salvador, 24 de septiembre de 1991.
- 37/ Documento E/CN.4/1991/34, párr. 103.
- 38/ Comunicado del FMLN a Tutela Legal del Arzobispado, de fecha 20 de septiembre de 1991.
- 39/ Le Monde. Edición del 22 de febrero de 1991.
- 40/ La Prensa Gráfica. El Diario de Hoy. Ediciones de fecha 9 de abril de 1991.
- 41/ El Salvador on Line. Edición del 27 de mayo de 1991.
- 42/ El Diario de Hoy. Edición del 5 de abril de 1991.
- 43/ Fuerza Armada de El Salvador. Estado Mayor Conjunto, San Salvador 5 de junio de 1991.
- 44/ La Prensa Gráfica. Edición del 5 de junio de 1991.
- 45/ Comunicado de la Embajada de El Salvador ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra.
- 46/ El Salvador, 1º de junio de 1991.
- 47/ Documento E/CN.4/1991/34, párrs. 107 a 111.
- 48/ Comunicado de la Fuerza Armada, Estado Mayor Conjunto, San Salvador, 7 de marzo de 1991.
- 49/ El Salvador on Line, 4 de marzo de 1991.
- 50/ Ibid., 15 de julio de 1991.
- 51/ Comunicado del FMLN de 11 de septiembre de 1991.
- 52/ Comunicado de 9 de abril de 1991.
- 53/ Documento E/CN.4/1991/34, párr. 134.
